

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 63
O R D I N A R I A
LUNES 17 DE JUNIO DE 2013

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta minutos del lunes diecisiete de junio de dos mil trece, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número sesenta y dos, ordinaria, celebrada el jueves trece de junio de dos mil trece.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el diecisiete de junio de dos mil trece:

II. 1. 99/2012

Controversia constitucional 99/2012 promovida por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco, en contra del Poder Legislativo de la misma entidad, demandando la invalidez del Decreto 24083/LIX/12 por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado de 18 de agosto de 2012. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. Se sobresee en la presente controversia constitucional, por cuanto hace al primer párrafo del Artículo Cuarto Transitorio reclamado, en términos del considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. Con la salvedad anterior, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 2º., fracciones XIII y XV, 48, fracciones I, segunda parte, y II, segunda parte; 51, 52, fracciones XIII y XV; 62, 63, 77, primer párrafo, 85 bis, fracción VI; 98 y 101 bis, párrafo cuarto, de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Transitorios Cuarto, segundo párrafo, y Quinto, fracción I, del Decreto por el que se reformó tal ordenamiento, así como el artículo 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año dos mil trece”*.

El señor Ministro Presidente Silva Meza recordó que en la sesión anterior se alcanzó una votación unánime para declarar la invalidez de las disposiciones impugnadas, con las salvedades del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea,

indicando que la propuesta de la señora Ministra Luna Ramos se ocupa de establecer a cuáles artículos, por pertenecer a un mismo sistema, deberá extenderse dicha declaración.

La señora Ministra Luna Ramos explicó que su nueva propuesta consiste en suprimir el considerando quinto, relacionado con la fijación de la litis, y modificar el sexto, para determinar el sobreseimiento únicamente por lo que respecta al primer párrafo del artículo cuarto transitorio del decreto combatido. Agregó que en el considerando séptimo se verifica la violación al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en tanto que la propuesta de las tarifas para el cobro del derecho de agua es una facultad que corresponde a los municipios y no puede ejercerse por los Consejos Tarifarios, en el entendido de que se citan los demás artículos relacionados con la existencia de los referidos Consejos y el cobro de los derechos en mención.

En cuanto a la parte relativa a los efectos, indicó que se propone declarar la invalidez de la primera parte del párrafo segundo del transitorio cuarto del Decreto impugnado, y que la segunda parte de dicho precepto, en cuanto establece que si los Consejos Tarifarios no hubieran fijado las tarifas, se actualizarán las vigentes conforme al índice nacional de precios al consumidor al mes de noviembre de dos mil doce, se toma como base para determinar el efecto de la referida declaración en cuanto a la fijación de las tarifas, hasta en tanto el Congreso local lleve a cabo la reforma

correspondiente. Finalmente, señaló que se propone declarar la invalidez de todos los demás artículos que están relacionados con la creación de los Consejos Tarifarios.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de once votos.

Después de que el secretario general de acuerdos diera lectura a la propuesta de puntos resolutivos, el señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en esos términos.

Enseguida, el secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

II. 2. 599/2012 Amparo en revisión 599/2012, promovido por ***** en contra del Congreso de la Unión y otras autoridades, reclamando la inconstitucionalidad del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** , en contra del tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en los términos señalados en esta ejecutoria”*.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz precisó que en la Primera Sala se decidió mayoritariamente que este asunto fuera resuelto por el Tribunal Pleno. En cuanto a los antecedentes del caso, refirió que el veintiocho de julio de dos mil once el quejoso solicitó vía electrónica a la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior de la Federación las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de cada uno de los quinientos diputados federales, y que esta Unidad negó la entrega de la información solicitada en aplicación del párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece que la publicidad de la información relativa a la situación patrimonial se hará únicamente si se tiene la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. Agregó que el quejoso interpuso recurso de revisión ante dicha autoridad, el cual fue resuelto por el Comité Resolutor de los Recursos de Revisión y de Reconsideración en el sentido de confirmar la negativa con fundamento en ese mismo precepto, y que ante esta nueva negativa presentó una demanda de amparo indirecto, en la que alegó la inconstitucionalidad del precepto referido, por considerarlo violatorio de los artículos 6º y 134 constitucionales.

Asimismo, expuso que la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a la que correspondió conocer del asunto, resolvió sobreseer y negar el amparo; ante lo cual el quejoso interpuso recurso de revisión, que resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa del Primer Circuito en el sentido de modificar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio de amparo y remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia.

Mencionó que el tema central a discutir en el presente asunto se podría formular en los siguientes términos: ¿el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al sujetar la publicitación de toda información relativa a la situación patrimonial del propio servidor a su autorización previa y específica, establece una limitante al derecho de acceso a la información que viola el artículo 6º de la Constitución Federal? Indicó que el estudio del presente asunto se encuentra vinculado con otros preceptos que no están reclamados y que establecen la misma condición, prácticamente absoluta, de que se verifique la autorización del servidor público para que se dé a conocer su situación patrimonial.

Finalmente, mencionó que realizaría ajustes al considerando de competencia en términos de los acuerdos que entraron en vigor después de que se entregó el asunto para su listado a la Secretaría General de Acuerdos, señalando que a partir de la página seis y hasta el final del proyecto, se expone la propuesta de fondo del asunto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno los apartados: I. Antecedentes, II. Trámite, III. Competencia, y IV. Procedencia; los cuales se aprobaron, en votación económica, por unanimidad de once votos.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó interrogantes sobre si debió llamarse a juicio como terceros perjudicados a los diputados que indicaron no estar de acuerdo con que la información de su declaración patrimonial fuera publicada, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la anterior Ley de Amparo.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que si en el presente asunto únicamente debe determinarse si es o no constitucional el artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no resulta indispensable llamar a los diputados en lo individual, máxime que se tuvieron como autoridades responsables a quienes intervinieron en la creación de dicho precepto, entre las que se encuentran la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación y el Director General del Diario Oficial de la Federación.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que si un diputado manifiesta que no está de acuerdo con que la información de su declaración patrimonial sea publicada, resulta que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, indicando que, no obstante, la posibilidad de realizar el emplazamiento a los terceros perjudicados podría depender del resultado final, pues de negarse el amparo o sobreseerse en el asunto, ello sería innecesario, de ahí que convendría dejar encorchetada esta problemática.

El señor Ministro Presidente Silva Meza señaló que al no haber inconveniente del señor Ministro ponente para hacer el referido encorchetamiento, es dable continuar con la discusión del fondo del asunto.

El señor Ministro Cossío Díaz indicó que para resolver si los agravios del quejoso son suficientes para demostrar que, contrariamente a lo establecido por la Juez de Distrito, el artículo impugnado es inconstitucional, en el proyecto se da respuesta a seis preguntas, indicando que la primera de ellas destaca porque su respuesta en sentido afirmativo constituye una condición de procedencia, pues tiende a determinar si el estudio realizado por la referida juzgadora fue incompleto y poco detallado como lo aduce el recurrente. Señaló que en el proyecto se precisa que al resultar fundados los argumentos del quejoso el Tribunal Pleno debe avocarse al estudio de los planteamientos de constitucionalidad esgrimidos a fin de evaluarlos en su dimensión y teniendo en cuenta los elementos cuyo estudio omitió la juzgadora.

El señor Ministro Aguilar Morales consideró que el estudio realizado por la Juez de Distrito no alcanzó a la sustancia de la causa eficiente de constitucionalidad planteada por la parte quejosa, pues no tomó en cuenta que la inconstitucionalidad en cuestión no sólo se hacía depender del hecho de que el precepto impugnado aludiera a una restricción o límite al derecho de acceso a la información, sino también del hecho de que su diseño no es

congruente con el modelo constitucional de ese derecho y con el principio de máxima publicidad, en tanto que no toda información perteneciente a un servidor público puede estar restringida en automático, pues debe darse la posibilidad de que el acceso se someta a un *test* de daño o de interés público.

Además, consideró que, para efectos de la precisión de la litis, debe reflexionarse si procede declarar firme el pronunciamiento de la Juez de Distrito respecto del concepto de violación reseñado en el inciso c) de su sentencia, en cuanto a que el numeral impugnado no vulnera el artículo 134 constitucional, pues no hubo agravio en ese sentido.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas señaló que el asunto implica una confrontación entre el derecho de acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos personales. Manifestó compartir el análisis que se realiza en cuanto al principio de máxima publicidad y que el derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto ni irrestricto, indicando que, no obstante, el estudio debería adecuarse al nuevo contenido del artículo 6° constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio pasado, y hacer referencia al alcance de la restricción de todo el continente informativo y la protección de datos personales, de conformidad con este nuevo numeral 6° y el 16 constitucionales, porque el principio de máxima publicidad guarda un sano equilibrio entre su objetivo y la protección de determinada información y la de

los datos personales, no sólo de quien declara su situación patrimonial, sino de los terceros con los que guarda relación.

Tomando en cuenta que la declaración patrimonial conlleva efectos y consecuencias en el ámbito penal y administrativo sancionador, señaló que no constituye un tema menor la reserva de alguna información y determinar si la declaración patrimonial se equipara o no a una averiguación previa o a un procedimiento seguido en forma de juicio, y si es aplicable o no lo que al respecto este Pleno ha sostenido en los precedentes.

Además, consideró conveniente ahondar en la protección de datos personales y sensibles, así como en el contenido de la información inherente a terceros, como son los dependientes económicos o incluso el propio cónyuge, ya que, por ejemplo, con motivo de una sociedad conyugal puede imbricar información que no es exclusiva del servidor público.

Finalmente, manifestó que, sin menoscabo de estar de acuerdo con diversas consideraciones del proyecto, se inclinaría por una interpretación conforme del artículo impugnado.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que en la parte del proyecto en la que se responde si el estudio realizado por la Juez de Distrito fue incompleto y poco detallado, como lo aduce el recurrente, se invierte lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la anterior Ley de Amparo, en el sentido de

que el Tribunal Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia, o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida, y cuando estimen que son fundados deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador de primera instancia; lo anterior, al estimar que el análisis parte de que la Juez federal hizo un estudio incompleto, para entrar de lleno al análisis de los conceptos de violación, sin haber analizado en primer lugar los agravios, y una vez que éstos se declaren fundados, abordar los conceptos de violación que no se hubieren analizado.

Precisó que en los agravios no se justifica que el estudio realizado por la Juez de Distrito sea incompleto, pues no se explicita por qué se considera que no son aplicables las tesis de la Suprema Corte que citó, o por qué no tiene razón al señalar que la norma impugnada establece una excepción justificada al principio de máxima publicidad. Por ende, consideró que la primera parte de los agravios podrían estimarse inoperantes a reserva de estudiar lo relacionado con el interés público y la prueba del daño.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz señaló que incorporará al proyecto las consideraciones aducidas por el señor Ministro Aguilar Morales. Por otra parte, señaló que la inconstitucionalidad del precepto impugnado no puede salvarse mediante una interpretación conforme. Precisó que la parte quejosa no adujo que el estudio realizado por la juez

de Distrito sea inadecuado sino que éste es incompleto, pues expresa que planteó varios temas y que no todos fueron motivo de pronunciamiento.

Por ello, señaló que propone determinar que este agravio es fundado y que, por tanto, procede resolver con exhaustividad el problema que se planteó, señalando que se reservaría responder las consideraciones de la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas, por referirse propiamente al problema de constitucionalidad.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que se apartaría de esta parte del proyecto, al considerar que el quejoso no está combatiendo la razón proporcionada por la Juez de Distrito para negar el amparo.

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó la propuesta del proyecto en cuanto al primer cuestionamiento planteado, indicando que ésta es la que se sometería a votación en un primer momento.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea manifestó interrogantes sobre si se votará la propuesta relativa a declarar fundado el agravio en el sentido de que el estudio realizado por la Juez de Distrito fue incompleto y poco detallado, o bien la relativa a declarar la inconstitucionalidad del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; a lo que el señor Ministro Presidente Silva Meza

respondió en el sentido de que únicamente sometería a votación la primera de esas propuestas.

El señor Ministro Aguilar Morales precisó que en su observación se refirió a que el recurrente no combatió la determinación de la Juez de Distrito en el sentido de que el artículo combatido no vulnera el artículo 134 de la Constitución Federal, y que, por tanto, ésta podría quedar firme.

Sometida a votación la propuesta del proyecto modificado, consistente en declarar fundado el agravio relativo a que el estudio realizado por la Juez de Distrito que conoció del asunto fue incompleto y poco detallado, se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza señaló que queda a salvo el derecho de los señores Ministros para formular los votos que estimen pertinentes.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz reiteró que el tema central sobre el que debe versar la discusión es la constitucionalidad del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos, indicando que las preguntas precisadas en el proyecto forman sólo una guía metodológica.

El señor Ministro Valls Hernández manifestó compartir la propuesta del proyecto, estimando que constitucionalmente el principio rector en la materia es el de máxima publicidad, por lo que si bien a la luz del propio numeral 6º, y del artículo 16, ambos de la Constitución Federal, los datos personales encuentran protección constitucional e implican, por ende, una limitante al derecho de acceso a la información pública, lo cierto es que éste no puede restringirse de forma absoluta, máxime si se parte de la propia finalidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, en tanto que permiten advertir que la función de éstos está apegada a la legalidad, de manera que no pueden mantenerse totalmente fuera del escrutinio público.

Indicó que lo anterior se confirma con diversos documentos internacionales ratificados por México y que aluden a la necesaria publicidad de las declaraciones patrimoniales para combatir la corrupción y transparentar la gestión pública, como son la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada en mil novecientos noventa y siete, sin reservas, así como la Ley Modelo de Establecimiento de Normas de Conducta para el Correcto, Honorable y Adecuado Desempeño de las Funciones Públicas de la Organización de Estados Americanos.

Indicó estar de acuerdo en que el derecho de acceso a la información pública no se traduce en que se deba difundir la totalidad de las declaraciones, pues éstas contienen ciertos datos de índole personal que gozan de protección constitucional, máxime que de ningún modo es necesaria su difusión para el escrutinio social sobre la función y/o desempeño de un servidor público.

De esta forma, señaló que la disposición impugnada, al señalar que la publicidad en tales declaraciones se hará sólo cuando previa y expresamente lo autorice el funcionario público es inconstitucional, máxime que aquellas se tratan de documentos por los cuales los servidores públicos rinden cuentas y respecto de los que deben elaborarse versiones públicas, en las que se eliminan datos que en modo alguno sean necesarios para conocer el desempeño público, como son los datos personales del servidor público, de su cónyuge, de sus dependientes económicos, el Registro Federal de Causantes, la Clave Única de Registro de Población, el sexo, el estado civil, el domicilio, el número de teléfono particular, los número de cuentas bancarias y valores, datos de ubicación de bienes muebles e inmuebles, datos concretos de la forma en que éstos se adquirieron, los cuales necesariamente implican a terceros.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena manifestó no compartir la interpretación que el proyecto realiza del principio de acceso a la información pública, considerando que el artículo 6° de la Constitución Federal claramente

señala en sus fracciones I y II los casos en que es constitucionalmente válido limitar el acceso a la información: 1) cuando existan razones de interés público y 2) cuando exista información que se refiere a la vida privada, y 3), cuando exista información que se refiera a los datos personales.

De esta forma, señaló que tal y como lo sostuvo al resolverse la contradicción de tesis 56/2011, cuando una información claramente nace protegida por la fracción II del artículo 6° constitucional, esto es, con naturaleza de dato personal y parte de la privacidad de determinada persona, no puede resultarle aplicable la fracción I y atribuirle un carácter de información pública, en la que impera el principio de máxima publicidad. Así, estimó que la lectura aislada de las dos fracciones referidas transforma indebidamente la naturaleza de la información.

Por ende, señaló que si bien el acceso a la información se constituye como un derecho de todos los ciudadanos para que puedan ejercer otros derechos, no está permitido divulgar la información de la vida privada y datos personales de terceros, no obstante que esta información esté en manos de la autoridad, pues no por ello pierde su carácter privado, aunado a que no puede ejercerse un derecho fundamental en perjuicio de otro derecho si no media una causa proporcionada idónea que así lo justifique.

Asimismo, señaló que la propuesta debe hacer referencia a que derivado de los mismos principios rectores

del acceso a la información que se desprenden del documento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado el treinta de diciembre de dos mil nueve, y que se cita en el párrafo treinta y nueve del proyecto, cuando se está ante un dato personal de naturaleza sensible, en principio, sólo el titular de estos datos puede tener acceso a la información, lo que corrobora la constitucionalidad del artículo reclamado, en tanto sujeta a la voluntad del titular de la información personal la posibilidad de publicarla.

De igual forma, señaló no compartir la respuesta que proporciona el proyecto al cuestionamiento relativo a si los servidores públicos tienen o no un umbral distinto de protección de sus datos personales, considerando que no existe un fundamento constitucional o convencional para considerar que la ciudadanía esté legitimada para conocer todos los datos de un servidor público, aun los de carácter personal, debiendo tomarse en cuenta que el proyecto basa su conclusión en la ejecutoria de amparo en revisión 2044/2008, en donde la Primera Sala analizó un conflicto entre el derecho a la intimidad y al honor, y el derecho a la libertad de expresión, y en el caso se está ante un ejercicio del derecho de acceso a la información en el cual expresamente el artículo 6 de la Constitución Federal establece la obligación de las autoridades de resguardar todos los datos personales y evitar su divulgación; de ahí

que ese precedente no sea aplicable para visualizar la presente problemática.

Lo anterior lo consideró así, ya que para el ejercicio de la libertad de expresión operan otras limitantes que justifican la intromisión a la vida privada y a la intimidad de las figuras públicas, aunado a que si bien ciertos datos de los servidores públicos pueden incidir en el interés colectivo, éstos necesariamente deben haber pasado por un proceso previo que los desvincule de la protección y el resguardo exigido; además, indicó que para considerar que el dato personal del servidor público es adecuado para ser publicitado, primeramente, debe de ser útil para el control de la función pública.

De esta manera, tomando en cuenta la legislación ordinaria en análisis, señaló que la protección de los datos personales sólo encuentra una justificación para ser desprotegida y resulta adecuada para el ciudadano en ejercicio de su derecho de acceso a la información, cuando ésta previamente ha sufrido un proceso que verifique su desincorporación de lo privado al ámbito público, esto es, su adecuación, debido a la relevancia que verificar incrementos indebidos que puedan inferir el mal uso del gasto público.

Precisó que lo anterior resulta congruente con la iniciativa de la reforma al artículo 6º de la Constitución Federal publicada el diecinueve de diciembre de dos mil seis, pues en ella se especificó que habrá casos en los que la ley deberá prever la posibilidad de que algunos datos

personales puedan ser divulgados cuando un órgano jurisdiccional o administrativo determine que existan razones particulares que justifiquen su divulgación, previa garantía de audiencia del implicado, y que de cualquier forma las autoridades deben realizar una cuidadosa ponderación que justifique el hecho de que una información que pertenece al ámbito privado pueda ser divulgada por así convenir al interés público.

En estos términos, cuestionó dónde está la garantía de audiencia de los funcionarios para revelar sus datos patrimoniales que son atributo de la personalidad del ciudadano, no obstante que éste sea o no servidor público.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas manifestó no compartir la propuesta de declarar la inconstitucionalidad del precepto impugnado, indicando que el proyecto llega a esta conclusión sin que se haya valorado el alcance de la voluntad del declarante. De esta forma, estimó que el precepto, lejos de ser inconstitucional, al consultar la voluntad de hacer públicos sus datos, guarda congruencia entre el principio de máxima publicidad y la protección de datos personales, pues de la declaración patrimonial pueden desprenderse datos que contienen no sólo información del servidor público declarante, sino incluso de sus dependientes económicos.

Por tanto, señaló que la constitucionalidad del precepto se salva a través de una interpretación conforme, pues en

esencia no se aleja diametralmente del acceso a la información.

El señor Ministro Pérez Dayán expresó no estar de acuerdo con el contenido del proyecto, considerando que el análisis interrelacionado y armónico del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas con otras disposiciones puede llevar a advertir el alcance exacto de este artículo, más allá de que estaría de acuerdo en que se llamara al tercero perjudicado, en caso de fallarse en términos del proyecto.

De esta forma, manifestó que el artículo impugnado, al establecer que la publicación de la información relativa a la situación patrimonial se realizará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate, está permitiendo al Estado dar esta información a pesar de que se considere reservada o confidencial por alguna otra disposición legal, por lo que debe estimarse que no está calificando el contenido de ese tipo de información.

En ese sentido, señaló que el precepto impugnado únicamente permite entender que la información de que se trata puede ser divulgada siempre y cuando el interesado lo acepte, en la inteligencia de que es el artículo 6º constitucional el que le da el carácter de reservada o confidencial, la cual puede estar al alcance del público en los registros que para ese efecto se tienen y será utilizada en circunstancias anómalas.

El señor Ministro Presidente Silva Meza convocó a los señores Ministros para la Sesión Privada que se llevará a cabo a continuación, después de un receso, así como a la Pública Ordinaria que se celebrará mañana, martes dieciocho de junio de dos mil trece, a partir de las once horas, y levantó la sesión a las doce horas con cincuenta y cinco minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.